

EDITORIAL

EL PODER DE PRODUCIR VERDADES. DE LA ESTADÍSTICA AL ALGORITMO, DEL DATO AL METADATO

Estamos en febrero de 2026 y Donald J. Trump ha desregulado la emisión de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Aunque apenas sorprende, la noticia indigna. ¿Cómo es posible que, pese al amplio consenso científico sobre el origen antrópico del cambio climático, se adopten medidas destinadas a aumentar la emisión de las mismas sustancias que lo alimentan? Para rastrear el origen de esta decisión nos hace falta un poco de historia de la ciencia.

En el libro *Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global* (Madrid, 2020), Naomi Oreskes y Erik M. Conway nos remontan hasta las décadas centrales del siglo xx para trazar una parte de esa historia. Su investigación identifica y traza los vínculos entre aquellas personas, asociaciones y entramados empresariales que, de la mano de diversos actores políticos, han trabajado para cuestionar públicamente los hallazgos científicos que han permitido determinar, entre otras, la relación causal entre el humo del tabaco y el desarrollo de cánceres, entre la emisión de clorofluorocarburos y el agujero de la capa de ozono o entre la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Detrás de estas campañas se encontraban los intereses de corporaciones que no estaban dispuestas a renunciar a sus beneficios, pero también las convicciones ideológicas de investigadores corruptos dispuestos a traicionar los principios éticos de la praxis científica para conjurar el fantasma de la regulación. Adalides de la libertad —del mercado—, la entendían como el preludio de una pendiente por la que las sociedades occidentales se habrían deslizado irremediabilmente hacia el socialismo.

Ciertamente, ni la decisión de Trump ni el análisis de nuestro ecosistema científico se pueden desvincular a día de hoy del funcionamiento de las lógicas de mercado, que se manifiestan con particular rotundidad en el mundo editorial. Desde hace

unos años, los medios de comunicación publican con relativa frecuencia noticias y reportajes sobre editoriales depredadoras que se ceban con fondos públicos —o salidos de los bolsillos de los propios investigadores— con el fin de satisfacer las necesidades curriculares de personas cuyas carreras dependen no de la calidad de su trabajo, sino de su capacidad para maximizar su producción en forma de artículos. Las grandes editoriales de prestigio escapan a este escrutinio, pero no dejan de embolsarse ingentes cantidades de dinero de los organismos públicos de investigación, a los que con una mano les venden los derechos de acceso a sus colecciones de revistas y con la otra les cobran por la publicación en abierto de sus trabajos. Así las cosas, parece hoy más necesario que nunca defender y ensanchar aquellas iniciativas editoriales cuya labor se rige por criterios de calidad y por compromisos éticos firmes.

Sin embargo, no siempre se valora en su justa medida el papel que desempeñan las revistas universitarias en acceso abierto que siguen la llamada ruta diamante, sostenidas por instituciones públicas y ajenas a la lógica del beneficio. Su impacto científico y social contrasta con los presupuestos exigüos con los que operan, muy lejos de las cifras astronómicas que manejan las grandes editoriales comerciales —y, en otro registro, las depredadoras—. En el caso de la Universidad de Salamanca, la reciente reducción de plazas de técnicos editoriales en la plantilla, unida al aumento de tareas logísticas asignadas a los editores, no es solo un dato administrativo: es un síntoma de la fragilidad estructural de un modelo que aspira a garantizar la calidad, la accesibilidad y la independencia del conocimiento. La nuestra es una voz interesada, sí, pero consciente de que el futuro de *El Futuro del Pasado* no depende de evaluaciones externas, sino de nuestra capacidad para mantenernos fieles a los principios sobre los que asentamos el proyecto; y preocupada por cómo las lógicas espurias de ese mundo editorial que nos rodea puedan afectar a la casa que nos cobija, a nosotros y al resto de las revistas hermanas de la Universidad de Salamanca.

Las tensiones que observamos en el ámbito editorial no son sino una manifestación contemporánea de un problema más antiguo: la estrecha imbricación entre producción de conocimiento y ejercicio del poder. En el siglo xix, la estadística se convirtió en una herramienta privilegiada del Estado moderno: contar era conocer y conocer era gobernar. En el xx, la planificación tecnocrática y la fe en la gestión científica de lo social reforzaron esa aspiración de racionalidad objetiva. Nuestro presente digital no ha abandonado esa lógica; la ha intensificado hasta extremos inéditos, especialmente con el desarrollo reciente de sistemas de Inteligencia Artificial. Los sistemas de análisis masivo de datos, los modelos predictivos y los algoritmos que clasifican poblaciones, distribuyen recursos o priorizan riesgos sanitarios, educativos o policiales participan de una nueva forma de gubernamentalidad que se presenta como neutral, pero que descansa sobre supuestos teóricos, decisiones metodológicas y jerarquías de valor no siempre explícitas. En aras de una pretendida

mayor seguridad se predispone a la población a reducir sus niveles de libertad y su privacidad. Los datos personales son monedas de cambio muy valiosas.

Al igual que en otros momentos históricos, el problema no radica únicamente en la existencia de conocimiento experto, sino en la opacidad de los procedimientos que le otorgan autoridad y en la dificultad para someterlos a escrutinio público. Si en el pasado los censos, las tablas estadísticas o los tests psicométricos contribuyeron a naturalizar desigualdades sociales bajo la apariencia de objetividad, hoy los algoritmos pueden reproducir y amplificar sesgos inscritos en los datos con los que se entrenan. La promesa de eficiencia no sustituye la necesidad de un debate democrático sobre los fines a los que se orienta ese conocimiento ni sobre las estructuras de poder que lo sostienen. El desafío, en consecuencia, no consiste solo en corregir errores empíricos, sino en interrogar las condiciones bajo las cuales determinados procedimientos adquieren legitimidad pública y moldean decisiones colectivas. El desarrollo acelerado de estas tecnologías plantea, por ello, interrogantes que no son solo técnicos, sino también normativos y políticos. Sin una reflexión humanística que interroge sus fines, sus supuestos y sus efectos sociales, el riesgo no es únicamente el error, sino la naturalización de formas de gobierno cada vez menos transparentes y menos democráticas, acercándonos más a la distopía que a la eutopía, temas que ya hemos abordado en otras ocasiones.

Precisamente, uno de los aspectos más inquietantes del libro de Oreskes y Conway es su reflexión acerca de cómo los científicos que han promovido los discursos negacionistas se han valido de los mismos mecanismos que regulan la buena praxis científica —o, más bien, los han pervertido— para cuestionar y tergiversar los hallazgos que, en primer lugar, permitieron identificar esas amenazas contra la salud y el medioambiente y, en segundo, han sustentado las demandas de que se regulen las actividades que las provocan. Cabe por ello pensar que para combatir esos discursos no bastan los datos. Se hace imprescindible conocer cuál es el estado actual del conocimiento científico, pero también comprender cómo funciona la práctica científica, la manera en la que se formulan teorías, se contrastan hipótesis, se validan datos e interpretaciones y se alcanzan y desmontan consensos. En algunos libros de divulgación científica podemos encontrar buenos ejemplos de obras en las que todos esos elementos se combinan. Por poner tan solo un ejemplo, el libro de Adam Rutherford *Control. The Dark History and Troubling Present of Eugenics* (Londres, 2022) reconstruye la historia de los discursos sobre la eugenesia y de los horrores que han inspirado y, a la vez, explica por qué, desde el punto de vista del estado actual del conocimiento, las ideas que se encuentran detrás de las políticas racistas y supremacistas en auge en la actualidad o bien resultan moralmente cuestionables o bien no tienen ningún fundamento científico.

La historia de la ciencia y la práctica historiográfica en un sentido más amplio nos pueden ayudar también a socavar los argumentos pretendidamente históricos sobre los que se sustentan los discursos que amenazan la convivencia pacífica en

nuestras sociedades y el funcionamiento de los sistemas democráticos. Ahora bien, ¿podremos enfrentar estos problemas armados solo con datos y narrativas? Además de elaborar conocimiento sobre las sociedades del pasado, la práctica historiográfica —dentro y fuera de la academia— debería entrañar una reflexión sobre los procedimientos adecuados para hacerlo: sobre la naturaleza de las evidencias disponibles y su representatividad, sobre los marcos teóricos sobre los que apoyamos nuestras interpretaciones, sobre las metodologías de investigación y los cauces de debate que nos permiten contrastarlas y rebatirlas, sobre el valor de la duda y de la incertidumbre honestas a la hora de propiciar el diálogo sobre las condiciones históricas en las que construimos nuestro presente y nuestro futuro. ¿Hacemos esas reflexiones? ¿Las compartimos cuando divulgamos lo que conocemos sobre nuestro particular campo de especialización? ¿Explicamos por qué creemos saber lo que sabemos sobre el pasado y por qué pensamos que son falaces ciertos argumentos? ¿Qué riesgos corremos si no lo hacemos? Nos jugamos mucho. No podemos dejar que personajes como Donald J. Trump —con acciones como su orden ejecutiva «Restoring Truth and Sanity To American History»— y los coros de voceros que los acompañan nos impongan no solo una historia, sino una manera de pensar históricamente que sesga las interpretaciones para justificar la exclusión y legitimar la opresión.

Álvaro Carvaja Castro e Iván Pérez Miranda